Señores

**JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE PALMIRA**

E. S. D.

**Referencia:** ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA

**Demandante:**AMANDA BEATRIZ PÉREZ NIÑO Y OTROS.

**Demandado:** IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA (IPUC)

**Llamado en G:** SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

**Radicación:** 765203105002-2023-00094-00

**Asunto:** CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá D.C., abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116. del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.,** conforme al poder especial conferido y el cual se adjunta al presente libelo, manifiesto que estando dentro del término legal oportuno, respetuosamente procedo a contestar en **primer lugar**, la demanda impetrada por la señora AMANDA BEATRIZ PÉREZ NIÑO a nombre propio y en representación de los menores DAVID GAMBOA PEREZ Y SARAY GAMBOA PEREZ en contra de la IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA – en adelante IPUC- y, en **segundo lugar**, a pronunciarme frente al llamamiento en garantía formulado por esta última entidad a mi representada, en los siguientes términos:

**CAPÍTULO I.**

**I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA**

**AL PRIMERO**: **NO ME CONSTA** que el señor SAÚL GAMBOA LONDOÑO (Q.E.D.P) estuvo casado con la señora AMANDA BEATRIZ PÉREZ, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. No obstante, se vislumbra dentro del plenario Registro Civil de Matrimonio con indicativo serial No. 05485562.

**AL SEGUNDO: NO ME CONSTA** que de la unión conyugal se procrearon los menores David y Saray Gamboa Pérez, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. No obstante, se vislumbra dentro del plenario los Registros Civiles de Nacimientos de los menores referenciados.

**AL TERCERO: NO ME CONSTA** que el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) haya celebrado un contrato laboral con la Sede Cuarta de IPUC, ni que el Pastor Jesús Abadías haya sido su jefe inmediato, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**AL CUARTO: NO ME CONSTA** que la relación laboral inició el 28/06/2018 y finalizó el 26/02/2019 con el fallecimiento del señor SAÚL, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**AL QUINTO: NO ME CONSTA** las funciones desempeñadas por el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P), por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**AL SEXTO: NO ME CONSTA** que el Pastor Jesús Abadías en calidad de jefe inmediato le hubiera dado instrucciones y ordenes al señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P), por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**AL SÉPTIMO: NO ME CONSTA** la contraprestación percibida por el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) por las labores desarrolladas para IPUC, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**AL OCTAVO: NO ME CONSTA** las circunstancias de tiempo, modo y lugar del accidente de tránsito acaecido el 26/02/2019, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**AL NOVENO: NO ME CONSTA** que el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) se encontrara subordinado a las órdenes del señor Jesús Abadías, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**AL DÉCIMO: NO ME CONSTA** que, durante la vigencia de la relación laboral, IPUC no efectuó afiliación al Sistema General de Seguridad Social al señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P), por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**AL DÉCIMO PRIMERO: NO ME CONSTA** que el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) no registraba cotizaciones en pensiones en el periodo que laboró con IPUC, por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**AL DÉCIMO SEGUNDO: NO ME CONSTA** que a la fecha de presentación de la demanda IPUC no haya pagado a los demandantes la liquidación laboral del señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P), por cuanto es un hecho ajeno a mi representada, el cual debe ser probado por la parte interesada en el momento oportuno de conformidad con artículo 167 del Código General del Proceso aplicable por analogía y por disposición expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

**II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA**

Me opongo a la totalidad de las pretensiones de la demanda, en la medida en que comprometan la responsabilidad de mi procurada y exceden la posibilidad de afectación y el ámbito de cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros No. 0368055-5, en la cual figura como entidad tomadora y asegurada la IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA y como beneficiario terceros afectados, por cuanto las pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía desbordan los limites contractuales de la póliza.

Al respecto, debe precisarse que las pretensiones de la demanda van dirigidas directamente a que entre IPUC y el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) existió un contrato de trabajo solicitando se condene al pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones laborales y el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.

Ante lo anterior, es preciso indicar que mi representada SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. fue vinculada al presente proceso en calidad de llamada en garantía para que responda por las eventuales condenas a las que pudiera ser condenado IPUC, sin tener de presente que, mi representada solo amparó lo relativo a la RESPONSABILIDAD EN PREDIOS Y POR OPERACIONES, cuyo objeto es cubrir los daños causados a terceros o a sus bienes en el desarrollo de su actividad o en el predio que ejerce su labor, por lo que, NO ampara ninguna de las pretensiones solicitadas por la parte actora, dejando de presente que el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) falleció con ocasión a un accidente de tránsito.

Adicionalmente, tampoco se ha acreditado que los fundamentos en los que se soporta el petitum de la demanda constituyan un siniestro en los términos convenidos en el contrato de seguro que sirvió de fundamento a la vinculación de la Compañía al proceso, es decir, el amparo de Predios y Operaciones, pues el mismo solo se vería afectado si durante la vigencia de la Póliza se acredita que se causó un daño a terceros o sus bienes en el desarrollo de una actividad o en el predio donde se ejerce la labor IPUC.

De esta manera, y con el ánimo de lograr una indudable precisión frente a los improbados requerimientos pretendidos en la demanda, me refiero a cada pretensión de la siguiente manera:

**Frente a la pretensión PRIMERA: ME OPONGO** si se afectan los intereses de mi prohijada, debiéndose resaltar que, no obra en el expediente prueba documental alguna que evidencie que la demandada IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA- IPUC haya fungido como empleadora del señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P), debiendo precisar que, quien alega la existencia de una relación laboral debe demostrar que efectuó la prestación personal de la actividad a favor de la parte demandada, para que se aplique la presunción establecida en el art. 24 del CST y véase que en el caso marras, los demandantes no lo acreditan.

**Frente a la pretensión SEGUNDA:** **ME OPONGO** si se afectan los intereses de mi prohijada, debiéndose resaltar que, no obra en el expediente prueba documental alguna que evidencie que la demandada IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA- IPUC haya fungido como empleadora del señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P), debiendo precisar que, quien alega la existencia de una relación laboral debe demostrar que efectuó la prestación personal de la actividad a favor de la parte demandada, para que se aplique la presunción establecida en el art. 24 del CST., así las cosas no le corresponde a IPUC responder por conceptos de prestaciones sociales y compensación de vacaciones.

Se reitera que, mi representada SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., no fue llamada en garantía dentro del presente litigio con ocasión a una póliza de Cumplimiento que ampare acreencias laborales como las aquí solicitadas, sino que se le vinculó en virtud de la Póliza de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros No. 0368055-5, la cual no presta cobertura material de conformidad con las pretensiones de la demanda, toda vez que la mencionada póliza solo asegura la Responsabilidad en Predios y Por Operaciones, por daños causados a terceros o bienes en ejecución de las labores que presta IPUC, motivo por el cual, las acreencias laborales se encuentran por fuera del ámbito de cobertura de la póliza.

**Frente a la pretensión TERCERA:** **ME OPONGO** si se afectan los intereses de mi prohijada, debiéndose resaltar que, no obra en el expediente prueba documental alguna que evidencie que la demandada IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA- IPUC haya fungido como empleadora del señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P), debiendo precisar que, quien alega la existencia de una relación laboral debe demostrar que efectuó la prestación personal de la actividad a favor de la parte demandada, para que se aplique la presunción establecida en el art. 24 del CST., así las cosas no le corresponde a IPUC responder por concepto de Indemnización moratorio por no pago de prestaciones sociales.

Se reitera que, mi representada SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., no fue llamada en garantía dentro del presente litigio con ocasión a una póliza de Cumplimiento que ampare acreencias laborales como las aquí solicitadas, sino que se le vinculó en virtud de la Póliza de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros No. 0368055-5, la cual no presta cobertura material de conformidad con las pretensiones de la demanda, toda vez que la mencionada póliza solo asegura la Responsabilidad en Predios y Por Operaciones, por daños causados a terceros o bienes en ejecución de las labores que presta IPUC, motivo por el cual, las indemnizaciones laborales se encuentran por fuera del ámbito de cobertura de la póliza.

**Frente a la pretensión CUARTA:** **ME OPONGO** si se afectan los intereses de mi prohijada, debiéndose resaltar que, no obra en el expediente prueba documental alguna que evidencie que la demandada IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA- IPUC haya fungido como empleadora del señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P), debiendo precisar que, quien alega la existencia de una relación laboral debe demostrar que efectuó la prestación personal de la actividad a favor de la parte demandada, para que se aplique la presunción establecida en el art. 24 del CST., así las cosas no le corresponde a IPUC responder por una pensión de sobrevivientes, toda vez que, el reconocimiento y pago de la misma está a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

**Frente a la pretensión QUINTA:** **ME OPONGO** si se afectan los intereses de mi prohijada, debiéndose resaltar que, no obra en el expediente prueba documental alguna que evidencie que la demandada IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA- IPUC haya fungido como empleadora del señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P), debiendo precisar que, quien alega la existencia de una relación laboral debe demostrar que efectuó la prestación personal de la actividad a favor de la parte demandada, para que se aplique la presunción establecida en el art. 24 del CST., así las cosas no le corresponde a IPUC responder por concepto de sanción por no afiliación al Sistema General de Seguridad Social.

Se reitera que, mi representada SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., no fue llamada en garantía dentro del presente litigio con ocasión a una póliza de Cumplimiento que ampare acreencias laborales como las aquí solicitadas, sino que se le vinculó en virtud de la Póliza de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros No. 0368055-5, la cual no presta cobertura material de conformidad con las pretensiones de la demanda, toda vez que la mencionada póliza solo asegura la Responsabilidad en Predios y Por Operaciones, por daños causados a terceros o bienes en ejecución de las labores que presta IPUC, motivo por el cual, las sanciones laborales se encuentran por fuera del ámbito de cobertura de la póliza.

**Frente a la pretensión SEXTA:** **ME OPONGO** toda vez que el litigio aquí suscitado no se produjo con ocasión a un hecho, omisión o incumplimiento por parte de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., y en tal sentido, mi representada no debe asumir condenas por las facultades ultra y extra petita del juez.

**Frente a la pretensión SÉPTIMA:** **ME OPONGO,** toda vez que el litigio aquí suscitado no se produjo con ocasión a un hecho, omisión o incumplimiento por parte de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., y en tal sentido, mi representada no debe asumir erogaciones por agencias en derecho y costas procesales.

1. **EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA**
2. **INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS DEMANDANTES AL NO ACREDITAR NI SIQUIERA LA PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO PARA QUE SE ACTIVE LA PRESUNCIÓN DEL ARTÍCULO 24 DEL C.S.T.**

El artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 2° de la Ley 50 de 1990, presume que toda prestación personal de un servicio está regida por un contrato de trabajo, de modo que quien reclame la existencia de un contrato de trabajo, debe probar que prestó personalmente un servicio. Para el presente caso, los demandantes se limitan a hacer una serie de afirmaciones sin sustento probatorio, máxime si se tiene en cuenta que en las pruebas documentales aportada NADA relaciona una supuesta relación laboral entre el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) y la IPUC, sino que se limita a indicar que prestó sus servicios, que no lo afilió al sistema de seguridad social y que no le pagó prestaciones.

Al respecto, el artículo 24 del C.S.T. señala:

*“ARTICULO 24. PRESUNCION. <Artículo modificado por el artículo 2o. de la Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente>. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.”*

En apoyo al precepto normativo, la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral manifiesta: “(…) *para que se configure un contrato de trabajo, se requiere que en la actuación procesal (demanda) esté plenamente demostrada la actividad personal del trabajador demandante a favor de la parte demandada y la continua subordinación jurídica, supuestos fácticos que para el presente caso no se acreditaron en el escrito de demanda*…” (Subrayado y paréntesis fuera de texto)[[1]](#footnote-2).

Lo anterior, soportado en el carácter tuitivo o protector de las normas del derecho al trabajo, que le otorgan a quien alega su condición de trabajador una ventaja probatoria consistente en probar la simple prestación del servicio a una persona natural o jurídica, para que se presuma esa relación contractual laboral.

En igual sentido, la Sala Laboral de la Corte suprema de justicia en Sentencia SL4912-2020 señaló:

*“En efecto, se ha considerado que al quedar demostrada la prestación personal del servicio, debe presumirse la existencia del contrato de trabajo en los términos del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, sin que por ello se releve al demandante de otras cargas probatorias, tales como acreditar los extremos temporales de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización por terminación del vínculo sin justa causa, entre otros”*

A su vez, la Sentencia STL1940 de 2020 proferida por la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral establece sobre la carga probatoria lo siguiente:

*“En relación al tema, la jurisprudencia de esta corporación ha dispuesto:*

*“El denominado principio de la carga dinámica -y no estática- de la prueba, también tiene aplicación en asuntos de índole laboral o de la seguridad social y, dadas las circunstancias de hecho de cada caso en particular, en que se presente dificultad probatoria, es posible que se invierta dicha carga, a fin de exigir a cualquiera de las partes la prueba de los supuestos configurantes del thema decidendum.* ***Sin embargo, la parte que en comienzo tiene la obligación de probar, debe suministrar evidencias o fundamentos razonables sobre la existencia del derecho laboral que reclama, para que la contraparte, que posee mejores condiciones de producir la prueba o la tiene a su alcance, entre a probar, rebatir o desvirtuar de manera contundente el hecho afirmado****.”* (Subraya y negrita fuera de texto)

Se observa entonces que a pesar de que en materia laboral y seguridad social exista el principio de la carga dinámica de la prueba, es deber del demandante quien hace las afirmaciones debe probar lo manifestado, por lo menos suministrar evidencias o fundamentos razonables sobre lo que afirma.

De lo anterior, se colige que los demandantes al menos debían probar la prestación personal del servicio para poder presumir la existencia de un contrato de trabajo, situación que no se encuentra probada en el presente proceso. En el mismo sentido, se observa que los demandantes realizan manifestaciones sobre pagos realizados por la IPUC a favor del señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P), sin embargo, ningún recibo acredita ello, ni siquiera la afiliación a la seguridad social fue realizada con aquella, y aduce que celebró un contrato de trabajo verbal con la IPUC, sin embargo, no aporta prueba alguna que indique que prestó personalmente sus servicios como manifiesta en todo el escrito de la demanda.

1. **PRESCRIPCIÓN DE DERECHOS LABORALES**

Sin que pueda constituir reconocimiento de responsabilidad alguna, invoco como excepción la PRESCRIPCIÓN, en aras de defensa de mi procurada y tomando como base que en el presente proceso se pretende el reconocimiento de salario, prestaciones sociales e indemnizaciones, las cuales de conformidad con lo dispuesto en el Art. 488 del C.S.T., en concordancia con el Art. 151 del C.P.T., prescriben en un término de tres años y véase que la parte actora aduce que la relación laboral entre el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P.) y la IPUC finalizó el 26 de febrero de 2019 y radicó la demanda el 12 de septiembre de 2023, sin que se vislumbre que haya realizado previamente reclamación alguna al demandado, estando así, prescritos los rubros solicitados.

Al respecto lo preceptuado por el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo señala:

*‘’ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción, pero sólo por un lapso igual’’.*

A su vez el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo dispone:

*‘’ARTICULO 488. REGLA GENERAL. Las acciones correspondientes a los derechos regulados en este código prescriben en tres (3) años, que se cuentan desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, salvo en los casos de prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el presente estatuto’’.*

Al respecto, señala la Corte Suprema de Justicia en Sentencia CSJ SL 4222 de 2017 lo siguiente:

*“(…) son dos los preceptos que de manera general y con el carácter de orden público reglan la prescripción extintiva de la acción o del derecho: los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social: el primero, en lo correspondiente a los derechos regulados en ese cuerpo normativo y, el segundo, en lo que tiene que ver con el ejercicio de las acciones que emanan de las leyes sociales. Pero es importante subrayar que ambas disposiciones contemplan una prescripción trienal cuyo término de consolidación empieza a correr desde la ‘exigibilidad’ de la respectiva obligación. También en ambas no basta para la pérdida o extinción del derecho el simple paso del tiempo previsto en la ley, sino que se requiere, además, la inactividad en el derecho o en el ejercicio de la acción durante ese mismo tiempo, pues a decir de la segunda disposición, la simple reclamación escrita del trabajador, recibida por el empleador, sobre un derecho o prestación debidamente determinados, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso de tiempo igual”*.

Sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SL219-2018 del 14 de febrero de 2018 con ponencia del Magistrado Jorge Burgos Ruiz, estableció que el término de prescripción se debe contar a partir del momento en que los derechos pretendidos se hacen exigibles no desde la fecha en que se hace efectivo. Siendo así, los términos deben contabilizarse desde el momento en que se causa el derecho.

En conclusión, solicito declarar probada esta excepción comoquiera que, transcurrió más de 3 años desde la finalización del presunto vínculo laboral (26/02/2019) entre el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P.) y la IPUC y la radicación de la demanda (12/09/2023), motivo por el cual las obligaciones solicitadas se encuentran extinguidos por el fenómeno de la prescripción.

1. **INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN A CARGO DE LA IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA- IPUC, POR CUANTO DICHA SOCIEDAD NO OSTENTÓ LA CALIDAD DE EMPLEADOR DEL SEÑOR SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) Y NO SE ACREDITAN LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE UN CONTRATO DE TRABAJO**

La presente excepción se fundamenta en el hecho de que el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P), no tuvo ninguna vinculación laboral al servicio de la IPUC mediante un contrato laboral, comoquiera que, no se acreditan los elementos esenciales del contrato de trabajo, y en el caso marras si bien la parte actora aduce que el causante laboró al servicio de IPUC, que el Pastor Jesús Abadías fungió como su jefe inmediato el cual daba ordenes e instrucciones y que percibía un salario semanal, lo cierto es que, no se aporta prueba alguna que acredite su dicho. Al respecto para que una relación laboral se configure se deben acreditar elementos esenciales de un contrato de trabajo conforme a lo establecido por el artículo 23 del CST, principalmente el elemento de subordinación:

“***ARTICULO 23. ELEMENTOS ESENCIALES****.*

*1. Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres elementos esenciales:*

*a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;*

*b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y*

*c. Un salario como retribución del servicio.*

*2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen”[[2]](#footnote-3)*

Respecto a lo señalado por la parte actora, tendiente a indicar que el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) prestó sus servicios a favor de la IPUC y que el pastor Jesús Abadía como jefe inmediato dio instrucciones y ordenes al causante, como indicativo para acreditar una subordinación, es preciso señalar que no existen elementos probatorios que verifique dicha circunstancia, al respecto es importante mencionar que, para determinar que existió una relación de trabajo, se deben extraer los indicios establecidos por la OIT en la recomendación No. 198, los cuales fueron estudiados por la CSJ en sentencia SL 1439 de 2021 de la siguiente manera:

*“De esta forma, ha considerado como tales la prestación del servicio según el control y supervisión de otra persona (CSJ SL4479-2020); la exclusividad (CSJ SL460-2021); la disponibilidad del trabajador (CSJ SL25852019); la concesión de vacaciones (CSJ SL6621-2017); la aplicación de sanciones disciplinarias (CSJ SL2555-2015); cierta continuidad del trabajo (CSJ SL981-2019); el cumplimiento de una jornada u horario de trabajo (CSJ SL981-2019); realización del trabajo en los locales o lugares definidos por el del beneficiario del servicio (CSJ SL43442020); el suministro de herramientas y materiales (CSJ SL981-2019); el hecho de que exista un solo beneficiario de los servicios (CSJ SL4479-2020); el desempeño de un cargo en la estructura empresarial (SL, 24 ag. 2010, rad. 34393); la terminación libre del contrato (CSJ SL6621-2017) y la integración del trabajador en la organización de la empresa (CSJ SL4479-2020 y CSJ SL5042-2020)”*

Conforme con lo anterior, véase que, dentro del plenario no se acreditan los mencionados indicios, ni siquiera sumariamente, pues los demandantes se limitan a realizar manifestaciones sin aportar documental que las acredite, por lo que, es claro que NO existe certeza que entre el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) y la IPUC haya existido una vinculación de carácter laboral, ni mucho menos que se acrediten los presupuestos establecidos en el artículo 23 del CST.

Así las cosas, se concluye que el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) no tuvo una vinculación laboral al servicio de la IPUC, reiterándose que no se allegaron al plenario pruebas que acredite (i) la prestación personal del servicio, (ii) la subordinación, (iii) el salario y (iv) los indicios establecidos por la OIT en la recomendación 198, por tanto, al no acreditarse la relación laboral pretendida ni los presupuestos normativos y jurisprudenciales, no hay lugar a que la IPUC reconozca y pague conceptos como salarios, pago de prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones laborales estarán a cargo de su empleador.

1. **INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR COTIZACIONES AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES POR PARTE DE LA IPUC**

Se propone la presente excepción, en atención a que la parte demandante aduce que la IPUC no cumplió con su obligación de realizar cotizaciones al sistema general de pensiones, sin embargo, y como se ha venido expuesto a lo largo del presente escrito, los demandantes NO acreditan dentro del plenario que entre el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) y la IPUC haya existido una relación laboral, de la cual se desprenda la obligación de realizar las cotizaciones al sistema general en pensiones.

De conformidad con el artículo 15 de la Ley 100 de1993, modificado por el artículo 3º de la Ley 797/2003, son afiliados al sistema general de pensiones:

*1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, salvo las excepciones previstas en esta ley. Así mismo, los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegibles para ser beneficiarios de subsidios a través del fondo de solidaridad pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales.*

El artículo 17 de la misma Ley 100/93, modificado por el artículo 4º de la Ley 797/2003, dispone:

*Artículo. 17. Obligatoriedad de las cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.*

De acuerdo con lo anterior, la IPUC no se encontraba en la obligación de efectuar aportes al sistema general de pensiones para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte a favor del señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P), para los periodos comprendidos entre el 08/06/2018 al 26/02/2019, pues la parte actora no aportó prueba documental alguna que acredite la calidad de empleador de la IPUC, y de la cual exista la obligatoriedad de las cotizaciones a pensión a favor del causante.

En este punto, me permito traer a colación el artículo 22 de la Ley 100 de 1993 donde se estipula la obligación que tiene el empleador de asumir el pago de aportes al sistema general de pensiones siempre y cuando el trabajador este a su servicio, situación que no se configura para el presente caso.

***ARTÍCULO 22. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.****El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los* ***trabajadores a su servicio****. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno.* (Subrayado y negrilla fuera de texto).

*El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador.*

Por lo anterior, se reitera que la IPUC no tenía la obligación de reportar una afiliación al sistema general de pensiones en razón a que, el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) NO fungió como trabajador de aquella, y al no tener un vinculo laboral que los ate, no nació la obligación de realizar aportes al sistema. Por este motivo, la parte actora no puede alegar una omisión de afiliación a cargo de la sociedad que represento.

1. **ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA.**

Esta excepción se fundamenta en un hecho que es común denominador de la demanda, cual es la recurrente alusión a perjuicios que no están probados, de manera que debe destacarse que ni siquiera en gracia de discusión puede accederse a peticiones como las demandadas, en cuanto constituyen la búsqueda de indemnización de un detrimento que no está debidamente acreditado.

Por ende, si se llegara a aceptar que alguno de los perjuicios se generó, la estimación que de su monto realiza la parte actora sólo refleja una desmedida e injustificada ambición para obtener un lucro injustificado, como se aprecia del examen de los supuestos de carácter material y extrapatrimonial.

1. **COMPENSACIÓN.**

Se formula esta excepción en virtud de que en el improbable evento de que prosperen las pretensiones de la demanda y se imponga alguna condena a la demandada, del monto de esta deberán deducirse o descontarse las sumas que ya fueron pagadas al demandante.

1. **GENÉRICA O INNOMINADA.**

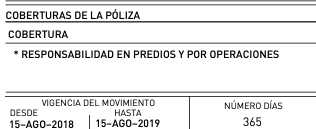
Ruego declarar probada cualquier otra excepción que resulte probada en el curso de este proceso, de conformidad a la Ley y sin que ello signifique que se reconoce responsabilidad alguna de mi representada.

**CAPÍTULO III.**

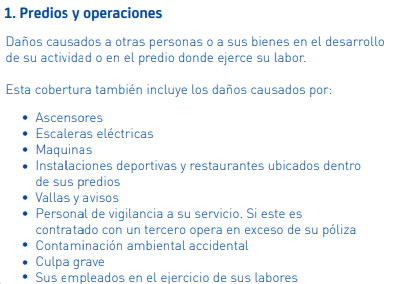
**CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR LA IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA-IPUC A SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A**

**PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

**AL PRIMERO: ES CIERTO,** el 28 de agosto de 2018 la IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA- IPUC suscribió con mi prohijada el SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS materializado en la Póliza No. 036055-5 en el cual se amparó la Responsabilidad en Predios y por Operaciones, con una vigencia del 15/08/2018 al 15/08/2019, como se evidencia:

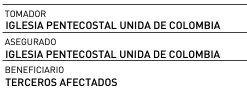


Cobertura el cual de conformidad con el clausulado general ampara:

****

Conforme con lo anterior, es menester rememorar que la parte demandante en el presente proceso pretende el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones laborales y pensión de sobrevivientes, con ocasión a una presunta relación laboral entre el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) y la IPUC, observándose a todas luces que la Póliza No. 036055-5 NO presta cobertura material pues no ampara los rubros aquí solicitados.

**AL SEGUNDO: NO ES CIERTO,** como se encuentra redactado, si bien la Póliza No. 036055-5 tiene una vigencia del 15/08/2018 al 15/08/2019, NO lo es que IPUC tenga la calidad de beneficiario, pues de conformidad con la caratula del contrato, los beneficiaros son los terceros afectados, como se evidencia:



**AL TERCERO: NO ES CIERTO**, como se encuentra redactado, si bien es cierto que el 12/09/2023 se radicó demanda ordinaria laboral por parte de los hoy demandantes en contra de IPUC, la misma no fue por los hechos ocurridos el día 26/02/2019, sino por la presunta relación laboral entre el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) y la IPUC que se suscitó de conformidad con los hechos de la demanda entre el 08/06/2018 al 26/09/2019, demanda que fue admitida mediante auto del 23/10/2023.

**FRENTE A LA ÚNICA PRETENSIÓN DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

**ME OPONGO** rotundamente a la prosperidad de la presente pretensión, puesto que no existe fundamento fáctico ni jurídico para que IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA- IPUC, exija a mi representada SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., la eventual condena que se le impute a favor del demandante y/o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer, como resultado de una eventual sentencia condenatoria en su contra, con ocasión al SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS materializado en la Póliza No. 036055-5, toda vez que esta no presta cobertura material frente a lo que se pretende en el presente asunto, como quiera que el amparo concertado en la póliza fue de Responsabilidad en Predios y por Operaciones.

Véase entonces que, en el caso en concreto, los demandantes pretenden el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones laborales y pensión de sobrevivientes, rubros los cuales NO se encuentra amparada en el contrato de seguro, toda vez que, los mismos son amparados por las pólizas de CUMPLIMIENTO que van encaminadas a garantizar el cumplimiento por parte del tomador de unas obligaciones contenidas en el contrato que se afianza, mientras que, el Seguro de Responsabilidad Civil por Daños que hoy nos ocupa, ampara los daños a terceros o a bienes ocasionados en desarrollo de la actividad o predio donde la IPUC ejerce su labor, debiéndose precisar que el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) falleció en un accidente de tránsito, es decir, no se realizó el riesgo asegurado, motivo por el cual la Póliza No. 036055-5 NO presta cobertura material conforme los hechos y pretensiones de la demanda, y por tanto, no hay lugar a que SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. deba responder por las eventuales condenas que se le imputen a la IPUC.

**EXCEPCIONES DE MÉRITO FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

1. **SE CONFIGURÓ LA EXCLUSIÓN NO. 1 DEL CONDICIONADO GENERAL DE LA PÓLIZA FRENTE AL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

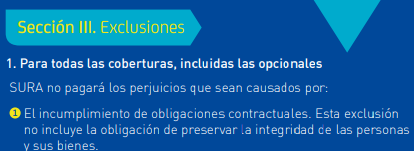
Se propone esta excepción teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 1056 del Código de Comercio, la aseguradora está facultada para limitar la cobertura de ciertos amparos e indicar cuales aspectos o circunstancias específicas no cubre, ello mediante las exclusiones que se comprenden en la póliza, en este sentido se precisa que la Póliza No. 036055-5 mediante la cual se amparó la Responsabilidad en Predios y por Operaciones prevé dentro de su clausulado la exclusión del amparo por el incumplimiento de obligaciones contractuales. En tal virtud debe precisarse que los demandantes pretenden en el presente proceso el reconocimiento y pago de acreencias laborales como consecuencia del incumplimiento de la IPUC en la relación contractual que sostuvo con el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P).

En este sentido, es menester precisar que las condiciones particulares y generales de la póliza que recoge el Contrato de Seguro de Cumplimiento reflejan la voluntad de los contratantes al momento de celebrar el contrato, y definen de manera explícita las condiciones del negocio aseguraticio, de esta manera el artículo 1056 del Código de Comercio, señala que el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume:

***“(…) Art. 1056.-******Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado.”.***

En virtud de la facultad citada en el referido artículo, el asegurador decidió otorgar determinados amparos, siempre supeditados al cumplimiento de ciertos presupuestos y/o generando exclusiones de amparos, limitando así la cobertura de la póliza.

Así las cosas, y de conformidad con las condiciones del contrato de seguro, existió una causal de exclusión del amparo, como se pasa a evidenciar:



Evidenciado lo anterior, y de conformidad con el artículo 1056 del Código de Comercio, la aseguradora previó la anterior exclusión de tal forma que en el caso marras, las acreencias laborales que se encuentra reclamando las demandantes derivadas de un presunto incumplimiento contractual laboral por parte de la IPUC, NO están cubiertas por la Póliza No. 036055-5 y como consecuencia de ello, no hay lugar a que mi representada afecte la póliza teniendo en cuenta que se incurrió en una causales de exclusión de la cobertura otorgada.

1. **AUSENCIA DE COBERTURA MATERIAL DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS NO. 036055-5, YA QUE LO PRETENDIDO EN LA DEMANDA SE ENCUENTRA POR FUERA DE LOS AMPAROS CONCERTADOS.**

Se propone esta excepción teniendo en cuenta que las condiciones particulares y generales de la póliza que recoge el Contrato de Seguro de Cumplimiento de disposiciones legales refleja la voluntad del tomador al momento de celebrar el contrato, y definen de manera explícita las condiciones del negocio aseguraticio, tal como se encuentra establecido en el Art. 1056 del C.Co., para el caso en concreto se evidencia que en la Póliza No. 036055-5 se concertó como amparo la Responsabilidad en Predios y por Operaciones, como consecuencia de los daños causados a terceros o bienes ocasionados en desarrollo de la actividad o predio donde la IPUC ejerce su labor. Para el caso concreto, la póliza de seguro no presta cobertura material, en atención a que los demandantes pretenden se condene a la IPUC al pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones laborales y pensión de sobrevivientes, conceptos los cuales se encuentran por fuera del ámbito de cobertura de la póliza de seguro.

Las compañías aseguradoras tienen la libertad de escoger cuáles son los riesgos que le son transferidos y en este sentido, solo se ven obligadas al pago de la indemnización en el evento que sean estos riesgos los que acontezcan durante el desarrollo de la relación contractual. La Corte Suprema de Justicia ha sido enfática al resaltar que las compañías aseguradoras pueden, a su arbitrio, asumir los riesgos que consideren pertinentes:

*“(…) como requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros, la individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 176), y ha extraído, con soporte en el artículo 1056 del Código de Comercio, la vigencia en nuestro ordenamiento “de un principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de personas, en virtud del cual* ***se otorga al asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”.****6*(Subrayado y negrilla fuera del texto)

De conformidad con la facultad otorgada por el artículo 1056 del Código de Comercio, las entidades aseguradoras pueden asumir a su arbitrio, con la salvedad que dispone la ley, los riesgos que le sean puestos a su consideración, pudiendo establecer las condiciones en las cuales asumen los mismos. En este orden de ideas y como se ha venido exponiendo de forma trasversal en el documento, no resulta jurídicamente admisible trasladar una eventual obligación indemnizatoria a mi poderdante, como quiera que la póliza no presta cobertura material.

Para el caso de marras, y lo relacionado con el amparo de Responsabilidad en Predios y por Operaciones, se debe tener en cuenta que el asegurador supeditó la afectación de los amparos debiéndose acreditar que el riesgo para la presente póliza se materialice, ello es que se pruebe que existió un daño a un tercero o un bien y que se haya ocasionado en el ejercicio de la actividad que desarrolla IPUC o en el predio donde la ejecuta.

De lo anterior, se puede inferir que, en el presente litigio, ni los demandantes ni la demandada IPUC, acreditaron el riesgo antes descrito, pues véase que se pretende es el reconocimiento y pago de acreencias laborales.

En ese sentido, es claro que el seguro no está llamado a responder en este caso, y por lo tanto no se materializa la afectación de la Póliza No. 036055-5, puesto que el incumplimiento aquí alegado no se encuentra amparado por mi representada la SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., dado que mi prohijada no expidió póliza de Cumplimiento que le permitan amparar las pretensiones incoadas por la parte actora.

En ese orden de ideas, existe una falta de cobertura material de la Póliza No. 036055-5, por cuanto, amparó únicamente la Responsabilidad en Predios y por Operaciones, lo que consiste en garantizar el pago de daños a terceros o bienes causados en ejecución de las actividades de IPUC, más NO debe asumir el pago de acreencias laborales por un presunto incumplimiento de las obligaciones laborales del asegurado, como lo que se pretenden en el presente litigio, así como tampoco indexaciones, costas, agencias en derecho, entre otros conceptos disimiles a los estipulados en el condicionado particular y general de la póliza.

1. **INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD U OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A POR CUANTO NO SE REALIZÓ EL RIESGO ASEGURADO.**

Para que nazca a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, es requisito que el solicitante del amparo demuestre tanto la realización del riesgo asegurado, como también la cuantía de la pérdida. En tal virtud, si no se prueban estos dos elementos (la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida) la prestación condicional de la aseguradora no nace a la vida jurídica y no podrán hacerse efectivas las pólizas. Dado que en el presente caso no se ha realizado el riesgo asegurado, en tanto, (i) no se ha acreditado el daño a un tercero o bien en ejecución de la actividad desarrollada por IPUC o en su predio, (ii) los demandantes pretenden la declaración de una relación laboral entre el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) con el asegurado y como consecuencia al pago de acreencias laborales y, (iii) se encuentra acredita que el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) falleció en un accidente de tránsito, así entonces, al no existir las garantías principales contratadas, no es posible afectar la póliza en mención de cara a los amparos específicamente concretados.

En ese sentido, el artículo 1077 del Código de Comercio, estableció:

“***ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso.***

*El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad*.” (subrayado y negrilla fuera del texto original)

El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, así como de la cuantía de la pérdida, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado doctrina respetada sobre el tema:

“*Es asunto averiguado que en virtud del negocio aseguraticio, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (…)”*

*“(…) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual si fuera poco, emerge pura y simple.*

*Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro,* ***el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su perdida.*** *(…) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago…[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (…)”*

*“(…) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero, aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., art. 1080)*[[3]](#footnote-4) ” (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

La importancia de la acreditación probatoria de la ocurrencia del siniestro, de la existencia del daño y su cuantía, se circunscribe a la propia filosofía resarcitoria del seguro, consistente en reparar el daño acreditado y nada más que este. Puesto que, de lo contrario, el asegurado o beneficiario podría enriquecerse sin justa causa, al indemnizarle un daño inexistente. En esta línea ha indicado la Corte Suprema de Justicia:

“*2.1. La efectiva configuración del riesgo amparado, según las previsiones del artículo 1054 del Código de Comercio, “da origen a la obligación del asegurador”.*

*2.2. En consonancia con ello, “[e]l asegurado o el beneficiario [están] obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro” (art. 1075, ib.), información que en el caso de la póliza de que se trata, debía verificarse “dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que tenga conocimiento de la ocurrencia de un tratamiento de las enfermedades de Alto Costo relacionada en la Cláusula Primera, así no afecte la Cobertura provista mediante la presente póliza” (cláusula décima, condiciones generales, contrato de seguro).*

*2.3. Pero como es obvio entenderlo, no bastaba con reportar el siniestro, sino que era necesario además “demostrar [su] ocurrencia (…), así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso” (art. 1077, ib.).*

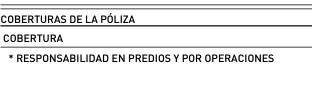
*2.4 Esos deberes acentúan su importancia en los seguros de daños, como el que es base de la acción, toda vez que ellos, “[r]especto del asegurado”, son “contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento” (art. 1088, ib.), de modo que “la indemnización no excederá, en ningún caso, el valor real del interés asegurado en el momento de siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario*” (art. 1089, ib.)[[4]](#footnote-5)”.

La Corte Suprema de Justicia, ha establecido la obligación del asegurado en demostrar la cuantía de la pérdida:

“(…) ***Se lee en las peticiones de la demanda que la parte actora impetra el que se determine en el proceso el monto del siniestro. Así mismo, no cuantifica una pérdida. De ello se colige con claridad meridiana que la demandante no ha cumplido con la carga de demostrar la ocurrencia del siniestro y su cuantía que le imponen los artículos 1053 y 1077 del C. de Comercio.*** *En consecuencia y en el hipotético evento en que el siniestro encontrare cobertura bajo los términos del contrato de seguros, la demandante carece de derecho a demandar el pago de los intereses moratorios*[[5]](#footnote-6)” (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

De lo anterior, se infiere que, en todo tipo de seguros, cuando el asegurado quiera hacer efectiva la garantía deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y de ser necesario, también deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1077 del código de comercio. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se han probado estos factores, por lo que, en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador.

Para mayor precisión, se reiteran los amparos contratados por la IPUC son los siguientes:



En esa medida, es claro que no se reúnen los presupuestos para que se afecte la cobertura de la Póliza De Responsabilidad Civil Por Daños A Terceros No. 036055-5 por la cual se vinculó a mi prohijada, teniendo en cuenta que los demandantes reclaman el reconocimiento de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones laborales y pensión de sobrevivientes, como consecuencia de una presunta relación laboral que sostuvo el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) con la IPUC, por lo que, es claro que NO hay lugar afectarse la de la póliza que sirvió para vincular a mí prohijada.

Por lo expuesto, hay una inexistencia de la obligación o responsabilidad indemnizatoria a cargo de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A como quiera que no se encuentra asegurado el pago de acreencias laborales o incumplimiento contractuales del asegurado, pues como se ha venido indicando la Póliza No. 036055-5 únicamente para la Responsabilidad en Predios y Por Operaciones.

1. **FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE LA IPUC Y POR PASIVA DE SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A DE CARA A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA**

Con relación a la legitimación en la causa, se ha indicado al respecto que “*La legitimación, como requisito a la acción, es una condición de la providencia de fondo sobre la demanda; indica, pues, para cada proceso, las justas partes, las partes legítimas, esto es las personas que deben estar presentes a fin de que el Juez pueda proveer sobre un determinado objeto.”* (Manual de Derecho Procesal Civil, pág. 116 y 117 Ed. EJEA), situación que claramente se presenta dentro del caso de marras como quiera que SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., no tiene relación con los hechos y pretensiones incoadas en la demanda, pues los demandantes pretenden la declaración de una relación laboral entre el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) y el IPUC, y con ello el pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones laborales y pensión de sobrevivientes, rubros los cuales NO se encuentran amparados por la Póliza De Responsabilidad Civil Por Daños A Terceros No. 036055-5 por la cual se vinculó a mi prohijada en el presente litigio, asimismo existiendo la evidente falta de cobertura material la IPUC no se encontraba legitimada para llamar en garantía a mi representada pues no se encuentra en la obligación legal de asumir un fallo adverso.

En relación con este tema, el Consejo de Estado en Sentencia 6058 del 14 de marzo de 1991 con ponencia del consejero Carlos Ramírez Arcila, expresó:

*“De la legitimación en la causa, puede decirse que es una relación, a la vez material y procesal, entre los sujetos de la pretensión (por activa o por pasiva) con el objeto de que se pretende.”*

Así mismo, refiriéndose a este tema el procesalista español Leonardo Prieto Castro, indica:

*“En ciencia jurídica se llama legitimación en causa o para la causa el concepto que determina si el demandante es el sujeto que tiene derecho a serlo en el proceso de que se trata, y el demandado la persona que haya de sufrir la carga de asumir tal postura en este proceso... A esta relación de las partes en el proceso se llama legitimación o facultad de demandar (legitimación activa) y obligación de soportar la carga de ser demandado (legitimación pasiva), por hallarse en determinada relación con el objeto traído al proceso”. (Derecho Procesal Civil. T.1, pág. 166, Ed. 1946, Saragoza).”*

En relación con este tema, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 14 de marzo de 2002, donde manifestó que:

*“La legitimación en la causa es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, en cuanto concierne con una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de éste, motivo por el cual su ausencia desemboca irremediablemente en sentencia desestimatoria debido a que quien reclama el derecho no es su titular o porque lo exige ante quien no es el llamado a contradecirlo”* (subrayas fuera de texto)

Así mismo, el Consejo de Estado, Sección Tercera en sentencia del 27 de noviembre de 2019, sobre el llamamiento en garantía adujo lo siguiente:

*“(…) En virtud de lo anterior, respecto de la relación procesal que vincula al demandado y al llamado en garantía, también sería necesario acreditar su legitimación en la causa. Es decir, verificar el vínculo contractual o legal que fundamenta el llamamiento para así determinar si el demandado podía formular llamamiento en contra del llamado, y si el llamado está en la obligación legal o contractual de asumir un fallo adverso al demandado.*

A la luz de lo indicado, que corresponde a lo ampliamente expuesto por las altas cortes, nos encontramos frente a una evidente falta de legitimación en la causa por parte de la IPUC de realizar el llamamiento en garantía a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., toda vez que, lo convocó por una Póliza De Responsabilidad Civil Por Daños A Terceros la cual NO presta cobertura conforme a las pretensiones de la demanda, por lo tanto, no existe obligación legal o contractual de asumir una eventual condena.

Por otro lado, frente a las pretensiones de la demanda es clara la falta de legitimación en la causa por pasiva de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. conforme a la Póliza De Responsabilidad Civil Por Daños A Terceros No. 036055-5, pues aquella únicamente amparó la RESPONSABILIDAD EN PREDIOS Y POR OPERACIONES, cuyo objeto es cubrir los daños causados a terceros o a sus bienes en el desarrollo de su actividad o en el predio que ejerce su labor, evidenciándose que no cubre acreencias laborales y pensiones, como lo que pretende la parte actora.

En conclusión, existe una falta de legitimación en la causa por activa de la IPUC y por pasiva de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., pues conforme con los hechos y pretensiones de la demanda, las cuales van direccionadas al reconocimiento de una relación laboral y el pago de acreencias laborales, es claro que, (i) se encuentra acreditado que la Póliza No. 036055-5, NO ampara los rubros solicitados en la demanda (salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y pensiones), existiendo una evidente falta de cobertura material y, (ii) que ante una eventual condena a la IPUC mi representada no está en la obligación legal ni contractual de asumir la misma, con ocasión a la póliza por la cual mi representada fue vinculada al proceso. Así las cosas, es viable concluir que mi representada no se encuentra obligada a soportar las cargas de las eventuales condenas que se imputen en el presente proceso por no estar legitimada en la causa.

1. **EL CONTRATO DE SEGURO ES DE CARÁCTER INDEMNIZATORIO, POR LO TANTO, NO PUEDE AFECTARSE POR CONCEPTOS NO JUSTIFICADOS.**

En línea de la excepción anteriormente planteada, el contrato mediante el cual se vincula a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., al presente litigio, es de carácter meramente indemnizatorio, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro corresponda, nunca podrá ser superior al valor asegurado.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

*“Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la tolerancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato.”[[6]](#footnote-7)*

Se puede concluir entonces que el Contrato de Seguro tiene un carácter meramente indemnizatorio y por tal motivo, tiene como finalidad llevar a la víctima al estado anterior, más no enriquecerla. Es por ello que aterrizando al caso en cuestión no es de recibo indemnizar el incumplimiento tal y como fue pretendido por la parte Demandante.

Así las cosas, el carácter de los seguros es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización, es decir no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Conforme a ello, en caso de pagarse suma alguna que no esté debidamente acreditada por la parte accionante, se estaría contraviniendo el citado principio de mera indemnización del contrato de seguro. En efecto, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de demostrar el incumplimiento imputable al contratista, así como su cuantía y eventualmente enriqueciendo a los accionantes.

No puede perderse de vista que el contrato de seguro no puede ser fuente de enriquecimiento y que el mismo tiene a un carácter meramente indemnizatorio. Así las cosas, de efectuar cualquier pago por concepto de aparentes sumas no ejecutadas que no han sido debidamente probadas, implicaría un enriquecimiento para los Demandantes. Como quiera que el incumplimiento que se reclama en este caso fue el no pago de salarios, prestaciones sociales indemnizaciones laborales por parte de la IPUC, sin embargo, la parte demandante no allega ningún soporte que acredite tal hecho. De modo que reconocer emolumento alguno por este concepto enriquecería a la parte demandante puesto que vulneraría el carácter indemnizatorio que rige los contratos de seguro.

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta que la demandante solicita el pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones laborales y pensión de sobrevivientes, y no se ha probado la veracidad del hecho, en ese sentido su reconocimiento claramente vulneraría el principio indemnizatorio. Lo anterior, por cuanto es inviable reconocer una suma que no se encuentra probada dentro del proceso y que se encuentra por fuera del ámbito de cobertura material.

1. **UBÉRRIMA BUENA FE**

Esta excepción se fundamenta en el hecho de que los contratos de seguro se caracterizan por ser de *ubérrima buena fe*, significa que el asegurador parte de la base de que la información dada por el tomador es cierta. Por tanto, no se exige a la compañía aseguradora realizar una valoración detallada de los elementos constitutivos de todos los riesgos que opta asegurar; pues la aseguradora únicamente asume sus obligaciones basadas en el dicho del tomador, es decir, no le compete a la compañía cerciorarse si lo que afirma el afianzado de la póliza es cierto o no.

Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-232 de 1997 del 15 de mayo de 1997 estableció:

*‘’Esta particular situación, consistente en quedar a la merced de la declaración de la contraparte y contratar, generalmente, en virtud de su sola palabra, es especial y distinta de la que se da en otros tipos contractuales, y origina una de las características clásicas del seguro: la de ser un contrato de ubérrima buena fe.*

*Aseverar que el contrato de seguro es uberrimae bona fidei contractus, significa, ni más ni menos, sostener que en él no bastan simplemente la diligencia, el decoro y la honestidad comúnmente requeridos en todos los contratos, sino que exige que estas conductas se manifiesten con la máxima calidad, esto es, llevadas al extremo’’.*

En el mismo sentido, el doctor Hernán Fabio López Blanco en su libro Comentarios al Contrato de Seguros-II edición manifiesta que:

“(...) *las empresas aseguradoras no están obligadas a realizar inspecciones de los riesgos para determinar si es cierto o no lo que el tomador asevera. El contrato de seguro, como contrato de ubérrima buena fe, no puede partir de la base errada de que es necesario verificar hasta la saciedad lo que el tomador afirma antes de contratar, porque jamás puede suponerse que él miente*.”

Ahora bien, la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SC18563-2016 del 16 de diciembre del 2016, magistrado ponente el Doctor Álvaro Fernando García Restrepo, frente a la ubérrima de buena fe que caracteriza a los contratos de seguro ha indicado:

‘**’*La aseguradora actúa de acuerdo con la información dada por el tomador o asegurado la que debe considerarse fidedigna, y el hecho de que realice investigaciones es un punto que está a su libre arbitrio, y si no lo hace, tal conducta no puede justificar la falsedad del tomador del seguro’’****.* (Negrilla fuera del texto original)

Y sobre el mismo punto, indicó que en el hecho de exigir que las compañías aseguradoras realicen un estudio del riesgo, pese a la falsedad en la que muchas veces incurren los tomadores del seguro, implica justificar la mala fe del tomador. En este sentido manifestó:

*‘’El hecho de que el tomador o asegurado haya mentido en su declaración de asegurabilidad, ya de por sí implica reticencia que es causal de la nulidad, y si la compañía de buena fe acepta tal declaración, no puede señalarse que por tal conducta incurrió en una negligencia que implica la validez del contrato. De ninguna manera puede disculparse la mendacidad del tomador, ni aun con la falta de averiguación de la aseguradora, pues esta no es su obligación ante la declaración recibida’’.*

Por todo lo anterior, y traído al caso concreto, la compañía aseguradora solo se encuentra obligada a ser diligente en cuanto a la asesoría que le brinda al tomador o asegurado al momento de convenir el contrato de seguro de acuerdo a el estado del riesgo, pero su obligación no implica investigar la veracidad de dicho riesgo, pues como se ha dicho reiteradas oportunidades, en el contrato de seguro opera la ubérrima buena fe, es decir, se parte de que la información suministrada por el tomador del seguro es verdadera.

En consecuencia, SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., no está obligada a verificar la exactitud de la declaración del tomador de la póliza en cuanto a su relación contractual con sus trabajadores, dado que el contrato de seguro es un contrato de ubérrima buena fe y no existe legislación que obligue a la compañía a efectuar dichas valoraciones con antelación a la celebración de los contratos de seguro. Por tanto, en el evento de comprobarse que no se reúnen los presupuestos bajo los cuales la compañía brindó el amparo, deberá excluirse de responsabilidad a mi representada por faltarse al principio de buena fe.

1. **PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DEL SEGURO**

Pese a que mi representada de ninguna manera está obligada al pago de suma alguna y sin que constituya reconocimiento de responsabilidad alguna por parte de mí procurada, invoco como excepción la PRESCRIPCIÓN consagrada en el Artículo 1081 del Código de Comercio.

Al respecto, cabe resaltar lo enunciado en el Artículo 1081 del Código de Comercio, el cual establece previsiones no solo en relación con el tiempo que debe transcurrir para que se produzca el fenómeno extintivo, sino también respecto del momento en que el período debe empezar a contarse. Al respecto señala la mencionada disposición:

*“ARTÍCULO 1081. <PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria.*

*La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.*

*La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.*

*Estos términos no pueden ser modificados por las partes.”*

Al señalar la disposición transcrita los parámetros para la determinación del momento a partir del cual empiezan a correr los términos de prescripción, distinguen entre el momento en que el interesado, ha tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción, en la prescripción ordinaria y, el momento del nacimiento del derecho, independientemente de cualquier circunstancia y aun cuando no se pueda establecer si el interesado tuvo o no conocimiento de tal hecho, en la extraordinaria.

1. **EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO.**

En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que la Póliza que hoy nos ocupan sí presta cobertura para los hechos objeto de este litigio, que sí se realizó el riesgo asegurado y que, en este sentido, sí ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional contraída por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., exclusivamente bajo esta hipótesis, el fallador deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

***“ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA****. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074”.*

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia, ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

*“Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación,* ***el valor de la prestación a cargo de la aseguradora****, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños,* ***se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado****, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización”[[7]](#footnote-8)* (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al Despacho tomar en consideración que, sin perjuicio que en el caso bajo análisis no se ha realizado el riesgo asegurado, y que el Contrato de Seguro no presta cobertura por las razones previamente anotadas, en todo caso, dicha póliza contiene unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el Juzgado en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.

1. **COBRO DE LO NO DEBIDO Y ENRIQUECIMIENTO SIN JUSTA CAUSA**

Con fundamento en lo anterior, y una vez comprobado que no se acreditan los presupuestos para que la IPUC, sea condenada al reconocimiento y pago de las acreencias laborales; debe concluirse que condenar a dicha sociedad, al reconocimiento y pago de los rubros aducidos en el libelo de la demanda, se derivaría en un cobro de lo no debido, prohibido por nuestro ordenamiento jurídico. Así mismo, una remota condena en contra de esta generaría un rubro a favor de la parte demandante que no tiene justificación legal, contractual ni jurisprudencial, lo que se traduciría en un enriquecimiento sin causa.

1. **GENÉRICA Y OTRAS.**

Conforme a lo dispuesto en el artículo 282 del Código General del Proceso, solicito sea declarada cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, ya sea frente a la demanda o a los contratos de seguro utilizados para convocar a mi representada al presente litigio.

**CAPÍTULO IV.**

**HECHOS, FUNDAMENTOS Y RAZONES DE DERECHO DE LA DEFENSA**

En el caso marras, señora AMANDA BEATRIZ PÉREZ NIÑO a nombre propio y en representación de los menores DAVID GAMBOA PEREZ Y SARAY GAMBOA PEREZ iniciaron proceso ordinario laboral de primera instancia en contra de la IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA en pretendiendo en síntesis que: (I) se declare la existencia de una relación laboral entre el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) y la IPUC, (ii) Se condene al pago de salarios, prestaciones sociales, compensaciones de vacaciones e indemnizaciones laborales, (iii) Se condene al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes y (iv) costas y agencias.

Por consiguiente, la IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA llamó en garantía a SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., en virtud de la póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros No. 0368055-5 en aras de que mi procurada actúe como garante de las condenas que se le imputen.

En este sentido, precisaremos los motivos por los cuales el Juez deberá desestimar las pretensiones de la demanda y las enunciadas en el llamamiento en garantía formulado por IPUC a mi representada:

1. **Frente a las pretensiones de la demanda:**

* Se colige que los demandantes al menos debían probar la prestación personal del servicio para poder presumir la existencia de un contrato de trabajo, situación que no se encuentra probada en el presente proceso. En el mismo sentido, se observa que los demandantes realizan manifestaciones sobre pagos realizados por la IPUC a favor del señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P), sin embargo, ningún recibo acredita ello, ni siquiera la afiliación a la seguridad social fue realizada con aquella, y aduce que celebró un contrato de trabajo verbal con la IPUC, sin embargo, no aporta prueba alguna que indique que prestó personalmente sus servicios como manifiesta en todo el escrito de la demanda.
* En el caso concreto, transcurrió más de 3 años desde la finalización del presunto vínculo laboral (26/02/2019) entre el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P.) y la IPUC y la radicación de la demanda (12/09/2023), motivo por el cual las obligaciones solicitadas se encuentran extinguidos por el fenómeno de la prescripción.
* El señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) no tuvo una vinculación laboral al servicio de la IPUC, reiterándose que no se allegaron al plenario pruebas que acredite (i) la prestación personal del servicio, (ii) la subordinación, (iii) el salario y (iv) los indicios establecidos por la OIT en la recomendación 198, por tanto, al no acreditarse la relación laboral pretendida ni los presupuestos normativos y jurisprudenciales, no hay lugar a que la IPUC reconozca y pague conceptos como salarios, pago de prestaciones sociales, vacaciones e indemnizaciones laborales estarán a cargo de su empleador.
* La IPUC no tenía la obligación de reportar una afiliación al sistema general de pensiones en razón a que, el señor SAÚL GAMBOA (Q.E.D.P) NO fungió como trabajador de aquella, y al no tener un vínculo laboral que los ate, no nació la obligación de realizar aportes al sistema. Por este motivo, la parte actora no puede alegar una omisión de afiliación a cargo de la sociedad que represento.
* Si se llegara a aceptar que alguno de los perjuicios se generó, la estimación que de su monto realiza la parte actora sólo refleja una desmedida e injustificada ambición para obtener un lucro injustificado, como se aprecia del examen de los supuestos de carácter material y extrapatrimonial.

1. **Frente a las pretensiones del llamamiento en garantía:**

* La aseguradora previó la exclusión No. 1 de tal forma que en el caso marras, las acreencias laborales que se encuentra reclamando las demandantes derivadas de un presunto incumplimiento contractual laboral por parte de la IPUC, NO están cubiertas por la Póliza No. 036055-5 y como consecuencia de ello, no hay lugar a que mi representada afecte la póliza teniendo en cuenta que se incurrió en dos causales de exclusión del amparo.
* Existe una falta de cobertura material de la Póliza No. 036055-5, por cuanto, amparó únicamente la Responsabilidad en Predios y por Operaciones, lo que consiste en garantizar el pago de daños a terceros o bienes causados en ejecución de las actividades de IPUC, más NO debe asumir el pago de acreencias laborales por un presunto incumplimiento de las obligaciones laborales del asegurado, como lo que se pretenden en el presente litigio, así como tampoco indexaciones, costas, agencias en derecho, entre otros conceptos disimiles a los estipulados en el condicionado particular y general de la póliza.
* Hay una inexistencia de la obligación o responsabilidad indemnizatoria a cargo de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A como quiera que no se encuentra asegurado el pago de acreencias laborales o incumplimiento contractuales del asegurado, pues como se ha venido indicando la Póliza No. 036055-5 únicamente para la Responsabilidad en Predios y Por Operaciones.
* Teniendo en cuenta que la demandante solicita el pago de salarios, prestaciones sociales, vacaciones, indemnizaciones laborales y pensión de sobrevivientes, y no se ha probado la veracidad del hecho, en ese sentido su reconocimiento claramente vulneraría el principio indemnizatorio. Lo anterior, por cuanto es inviable reconocer una suma que no se encuentra probada dentro del proceso y que se encuentra por fuera del ámbito de cobertura material.
* Existe una falta de legitimación en la causa por activa de la IPUC y por pasiva de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., pues conforme con los hechos y pretensiones de la demanda, las cuales van direccionadas al reconocimiento de una relación laboral y el pago de acreencias laborales, es claro que, (i) se encuentra acreditado que la Póliza No. 036055-5, NO ampara los rubros solicitados en la demanda (salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y pensiones), existiendo una evidente falta de cobertura material, y, (ii) que ante una eventual condena a la IPUC mi representada no está en la obligación legal ni contractual de asumir la misma, con ocasión a la póliza por la cual mi representada fue vinculada al proceso. Así las cosas, es viable concluir que mi representada no se encuentra obligada a soportar las cargas de las eventuales condenas que se imputen en el presente proceso por no estar legitimada en la causa.
* SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., no está obligada a verificar la exactitud de la declaración del tomador de la póliza en cuanto a su relación contractual con sus trabajadores, dado que el contrato de seguro es un contrato de ubérrima buena fe y no existe legislación que obligue a la compañía a efectuar dichas valoraciones con antelación a la celebración de los contratos de seguro. Por tanto, en el evento de comprobarse que no se reúnen los presupuestos bajo los cuales la compañía brindó el amparo, deberá excluirse de responsabilidad a mi representada por faltarse al principio de buena fe.
* Los parámetros para la determinación del momento a partir del cual empiezan a correr los términos de prescripción, distinguen entre el momento en que el interesado, ha tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción, en la prescripción ordinaria y, el momento del nacimiento del derecho, independientemente de cualquier circunstancia y aun cuando no se pueda establecer si el interesado tuvo o no conocimiento de tal hecho, en la extraordinaria.
* Comedidamente le solicito al Despacho tomar en consideración que, sin perjuicio que en el caso bajo análisis no se ha realizado el riesgo asegurado, y que el Contrato de Seguro no presta cobertura por las razones previamente anotadas, en todo caso, dicha póliza contiene unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el Juzgado en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.
* Una vez comprobado que no se acreditan los presupuestos para que la IPUC, sea condenada al reconocimiento y pago de las acreencias laborales; debe concluirse que condenar a dicha sociedad, al reconocimiento y pago de los rubros aducidos en el libelo de la demanda, se derivaría en un cobro de lo no debido, prohibido por nuestro ordenamiento jurídico. Así mismo, una remota condena en contra de esta generaría un rubro a favor de la parte demandante que no tiene justificación legal, contractual ni jurisprudencial, lo que se traduciría en un enriquecimiento sin causa.

**CAPÍTULO V**

**MEDIOS DE PRUEBA**

Solicito atentamente decretar y tener como pruebas las siguientes:

# DOCUMENTALES

Ténganse como pruebas las que obran en el expediente y adicionalmente, solicito se tengan como pruebas las siguientes:

* 1. Copia de la caratula, anexos y las condiciones generales de la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros No. 036055-5

# INTERROGATORIO DE PARTE A LA SEÑORA AMANDA BEATRIZ PERÉZ NIÑO Y AL REPRESENTATE LEGAL DE IPUC

* 1. Ruego ordenar y hacer comparecer a la señora AMANDA BEATRIZ PERÉZ NIÑO para que en audiencia absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito les formularé sobre los hechos de la demanda.
  2. Ruego ordenar y hacer comparecer al representante legal de la IGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA (IPUC) para que en audiencia absuelva el interrogatorio que verbalmente o mediante cuestionario escrito les formularé sobre los hechos de la demanda.

1. **TESTIMONIALES**

Comedidamente solicito fijar fecha y hora para que se recepcione el testimonio de la Doctora VALENTINA OROZCO ARCE, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.144.176.752, que podrá citarse al correo electrónico [valenorozcoarce@gmail.com](mailto:valenorozcoarce@gmail.com) y quien funge como asesora externa de mi representada, con el objeto de que se pronuncie sobre los hechos en que se fundamentan las excepciones propuestas, la disponibilidad de la suma asegurada, el alcance de la cobertura otorgada y las exclusiones de la póliza de seguro que fue utilizado como fundamento de la convocatoria formulada.

**CAPÍTULO VI**

**ANEXOS**

1. Certificado de Cámara y Comercio de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.
2. Poder especial conferido y constancia de remisión al correo electrónico
3. Cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del suscrito.
4. Los documentos aducidos como pruebas.

**CAPÍTULO VII**

**NOTIFICACIONES**

* La parte demandante podrá ser notificada a la siguiente dirección electrónica: [amandabpn214@gmail.com](mailto:amandabpn214@gmail.com) y [sanchezvasabogada@gmail.com](mailto:sanchezvasabogada@gmail.com)
* La parte demandada IPUC al correo electrónico [webmaster@ipuc.org.co](mailto:webmaster@ipuc.org.co) y [juridicaprocesal@ipuc.org.co](mailto:juridicaprocesal@ipuc.org.co)
* El suscrito y mi representada en la secretaria de su despacho, en la Avenida 6ABis No.35N-100 Oficina 212 de la ciudad de Cali y en el correo electrónico [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)

Texto

Descripción generada automáticamente

Del señor Juez;

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA**

C.C. No. 19.395.114 de Bogotá D.C.

T.P. No. 39.116 del C.S. del C.S. de la J.

1. Sentencia SL 3009-2017 Radicación Nro. 47044, magistrado ponente Dr. Gerardo Botero Zuluaga. [↑](#footnote-ref-2)
2. Artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. [↑](#footnote-ref-3)
3. ÁLVAREZ GÓMEZ Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fiducia mercantil, Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125. [↑](#footnote-ref-4)
4. Sentencia SC2482-2019 de 9 de julio de 2019, Radicación n.° 11001-31-03-008-2001-00877-01. Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. MP: ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO [↑](#footnote-ref-5)
5. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil M.P. Dr. Pedro Octavio Munar Cadena. Exp. 1100131030241998417501 [↑](#footnote-ref-6)
6. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065. [↑](#footnote-ref-7)
7. CSJ, SALA DE CASACIÓN CIVIL – EXP. 5952 DIC 14/01 [↑](#footnote-ref-8)